



RESOLUCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 00001-00078327

En fecha 28 de marzo de 2022 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Consumo solicitud, formulada por [REDACTED] de acceso a información pública, solicitud que quedó registrada con el número de expediente 00001-00078327 y que tenía el siguiente tenor literal

- " - Copia de toda la documentación relacionada con el Informe sobre la determinación de la empresa responsable de facilitar la información alimentaria en productos alimenticios (SCC/AP/I 24 22/F) y más concretamente aquella relacionada con el procedimiento seguido para la emisión del mismo conforme a la 8ª Conferencia Sectorial de Consumo (entre otros, solicitud de la Junta de Andalucía, comunicaciones a CCAA, respuestas de las CCAA, etc) y adopción final del informe con constancia del firmante del Informe final*
- Orden del día, el Acta de la sesión y, en su caso, los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Consumo de fecha 30 de noviembre de 2022 "*

Con fecha 28 de marzo esta solicitud fue asignada a la Dirección General de Consumo, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para su resolución

De acuerdo con la letra b) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General considera que parte de la solicitud referente a la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente

Siguiendo el criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, expresado en el informe de 12 de noviembre de 2015 (N/REF CI/006/2015), procederá la inadmisión a trámite de una solicitud de acceso a la información pública cuando la misma se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento, así como cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración final

El procedimiento aprobado en la 8ª Conferencia Sectorial de Consumo tiene como finalidad establecer criterios comunes en la interpretación de normas que permitan disponer a los organismos de control de mecanismos útiles en su tarea de inspección y sanción. Estos criterios tienen la consideración de acuerdo a los efectos de la letra a) del artículo 151 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

El procedimiento previo a la adopción del acuerdo se inicia con la elaboración, por parte de la Dirección General de Consumo de un primer informe sobre la cuestión a debate. Este borrador es



enviado a todas las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que disponen de un plazo de 10 días hábiles para emitir las observaciones que estimen oportunas. Posteriormente, la Dirección General de Consumo emite un segundo informe, en el que se tienen en cuenta las observaciones recibidas y que, en unión de estas, es remitido de nuevo al resto de autoridades de consumo para su aprobación final.

En consecuencia, los intercambios entre las diferentes autoridades de consumo tienen la consideración de informes internos, que contienen borradores preliminares del texto que será finalmente aprobado por la Conferencia. Este informe es publicado en el sitio web del Ministerio de Consumo y contiene la argumentación acordada entre las diferentes autoridades de consumo para alcanzar los criterios comunes de interpretación.

Por consiguiente, se inadmite la solicitud de información "relacionada con el procedimiento seguido para la emisión del mismo conforme a la 8ª Conferencia Sectorial de Consumo (entre otros, solicitud de la Junta de Andalucía, comunicaciones a CCAA, respuestas de las CCAA, etc)"

En relación con la solicitud del informe final con constancia de firma, le indicamos que estos informes no se firman, son adopciones de criterios comunes de interpretación de las normas a efectos de inspección y sanción, para lograr una unidad real de mercado y similar protección de los consumidores en los distintos territorios de España, en base a un procedimiento público.

Por otra parte, el artículo 14.1 k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, prevé que el derecho acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para *"la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión"*

La Conferencia Sectorial de Consumo es un órgano de naturaleza eminentemente política y de toma de decisiones que, posteriormente, son ejecutadas por las diferentes secciones de trabajo de la Comisión Sectorial de Consumo. Por consiguiente, el contenido concreto de lo hablado en el seno de estas reuniones debe considerarse acogido a la confidencialidad propia de los procesos de decisión y deliberación necesaria de órganos de esta naturaleza.

En consecuencia, respecto del acceso a estas actas debe primar la salvaguarda de la garantía de la confidencialidad y el secreto requeridos en procesos de toma de decisiones, al igual que sucede con otros órganos de idéntica naturaleza política como el Consejo de Ministros y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha pronunciado a este respecto en varias ocasiones, indicando, en su Resolución 684/2020, que

«considera que la LTAIBG ampara el acceso a las actas de los órganos colegiados de dirección de Organismos y entidades públicas en la medida en que sus decisiones tienen incidencia en el ejercicio de funciones públicas y, por lo tanto, su conocimiento entronca con la finalidad de la norma, expresada en su Preámbulo: la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden



conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos () En atención a ello, las restricciones a las mismas deben ser proporcionadas y debidamente justificadas y en ningún caso genéricas»

La Sentencia en apelación de la Audiencia Nacional, de fecha 18 de noviembre de 2019, Sección 7ª, en el recurso de apelación nº 47/2019, distingue entre los acuerdos y las actas. Afirma que las actas de órganos colegiados vienen a reflejar *«opiniones, el contenido de las deliberaciones () y por el contrario el acuerdo refleja la decisión colegiada que se ha tomado en esa reunión del Consejo de Administración. Por lo que debemos también dejar claro que en ningún momento se puede ofrecer al solicitante esa información referida a las deliberaciones u opiniones vertidas en la reunión»*

Sobre esta base, el Consejo de Transparencia concluyó en la resolución citada que debía remitirse copia de las actas, en el caso de la Resolución mencionada del Consejo de Seguridad Nacional, *«de las que debe eliminarse el contenido que afecte a las deliberaciones u opiniones vertidas en la reunión, que tienen carácter reservado»*

Por lo tanto, se resuelve conceder parcialmente acceso a la información solicitada, sobre la base del artículo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual *“En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida”*

A tales efectos, se concede acceso a la documentación relacionada con el Informe final sobre la determinación de la empresa responsable de facilitar la información alimentaria en productos alimenticios (SCC/API/1 24 22/F) y aquella relacionada con el orden del día y los acuerdos alcanzados en la reunión nº 31 de la Conferencia Sectorial de Consumo celebrada el día 30 de noviembre de 2022, omitiendo el resto de información presente en el acta referida a las deliberaciones u opiniones vertidas en dichas reuniones

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso Contencioso-administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes, en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución

LA DIRECTORA GENERAL DE CONSUMO

Bibiana Medialdea García